

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado Peruano se ha comprometido en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos a promover y facilitar el desarrollo del arbitraje, como mecanismo alternativo para la solución de controversias en materia comercial. En efecto, el artículo 21.21 del mencionado Acuerdo señala expresamente lo siguiente:

"Artículo 21.21: Medios Alternativos para la Solución de Controversias

1. En la mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos de solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en el área de libre comercio.
2. A tal fin, cada Parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias.
3. Se considerará que una Parte cumple con lo dispuesto en el párrafo 2, si es parte y se ajusta a las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958, o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 1975".

En este sentido, mediante la Ley N° 29157, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar distintas materias a fin de facilitar la implementación del referido Acuerdo de Promoción Comercial, estando entre dichas materias las referentes a la facilitación del comercio así como a la promoción de la inversión privada.

El presente Decreto Legislativo tiene como objetivo cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial, mejorando la regulación del arbitraje y, en particular, la vinculada al convenio arbitral y la ejecución de laudos arbitrales como su propio texto señala, ajustándose a los estándares internacionales contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975.

En este contexto, teniendo en cuenta que la promoción de mecanismos de solución de controversias, entre los cuales se encuentra el arbitraje, tienen como finalidad la promoción de la seguridad en el comercio y las inversiones privadas, puesto que sin la presencia de tales mecanismos, las relaciones comerciales pueden verse reducidas; la aprobación de la presente norma es necesaria a fin de implementar y dar cumplimiento al artículo 21.21 del Acuerdo de Promoción Comercial.

En un mundo globalizado y en una economía en crecimiento, el arbitraje ha irrumpido con un conjunto de reglas eficientes para resolver conflictos. Los inversionistas y los agentes económicos esperan que las ventajas del arbitraje se encuentren reflejadas y protegidas por la legislación arbitral como punto de partida y que la práctica arbitral en manos de los operadores del sistema sea favorable al desarrollo del arbitraje como correlato.

La Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje de 1996 (ley arbitral de 1996), en este sentido, aprobó una regulación moderna del arbitraje que ha sentado las bases del desarrollo que tenemos y que se manifiesta en una demanda creciente de arbitrajes, una consolidación de las instituciones arbitrales y la formación de un mercado arbitral importante. Ciertamente es también que al lado de la ley han contribuido a este desarrollo; la apertura económica, la posición favorable del Estado para someterse a arbitraje, la aparición y/o consolidación de instituciones arbitrales, la proliferación de normas arbitrales en diversos ámbitos y la creciente conciencia de los operadores de que el arbitraje opera con reglas propias y diferentes a las reglas del proceso civil.

Como resultado de ello, en términos generales, tenemos una solución de conflictos más ágil, mejor especialización de quienes resuelven la controversia, mayor control de las partes sobre

la independencia e imparcialidad de quienes resuelven, mayor control de las partes sobre las reglas del proceso y mayor predictibilidad en las decisiones. La cultura arbitral contribuye así, no sólo a resolver conflictos, sino a hacerlo en un entorno eficiente con una mayor autonomía privada y descargando al sistema judicial del conocimiento de determinadas materias.

Esto ha permitido reducir el costo y sobre el todo el tiempo para la solución de las controversias y ha contribuido a reducir significativamente los costos de transacción en la economía. Se ha fomentado así el comercio y la inversión, al generar mayor seguridad a los inversionistas y agentes económicos y se ha abierto una válvula de escape del sistema judicial para los litigios comerciales. Asimismo nos hemos convertido en uno de los casos ejemplares en América Latina en esta materia, siendo el país que ha consolidado con más fuerza y claridad la institución del arbitraje en la región.

Sin embargo, luego de doce años de experiencia en la aplicación de la ley arbitral de 1996 y con un mercado arbitral en pleno crecimiento y desarrollo, la regulación requiere de cambios y ajustes. El Perú viene enfrentando un crecimiento importante del comercio y la inversión y un nivel de interrelación mayor con agentes internacionales que se verá incrementado aún más con la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Tenemos entonces el reto de conseguir en el arbitraje internacional los mismos éxitos y resultados que hemos alcanzado en el arbitraje doméstico y desarrollar la capacidad institucional de enfrentar una mayor demanda de arbitrajes, tanto en número como en importancia y complejidad.

Al mismo tiempo, se requiere ajustar la ley vigente a los últimos avances en la experiencia internacional y a los estándares comúnmente aceptados, haciendo que las características de nuestra ley sean reconocibles y comprensibles para los inversionistas y comerciantes, nacionales y extranjeros, de manera que se genere confianza de que en el Perú se arbitra siguiendo las reglas y principios internacionalmente aceptados.

En este orden de ideas, los cambios que se aprueban mediante el Decreto Legislativo están dirigidos a aumentar la competitividad del Perú como sede de arbitrajes, de manera que pueda ser elegido en la región como lugar adecuado para arbitrar en razón a la existencia de un marco legal seguro y predecible, ajustado a estándares internacionales. Es necesario en este punto tener en cuenta que a pesar de los desarrollos y avances alcanzados, aún no hemos podido consolidarnos como una plaza internacional de arbitrajes. Se espera con esta nueva regulación apuntalar el logro de este objetivo. Se espera también, de otro lado, que estas nuevas reglas de juego consoliden y afiancen una cultura arbitral en los operadores del sistema, abogados, árbitros, instituciones arbitrales y jueces, por cuanto una sincronización adecuada de estos operadores garantiza un desarrollo óptimo de la institución.

Uno de los cambios sustanciales que se aprueban con el Decreto Legislativo es el tránsito de un sistema dual a un sistema monista de regulación del arbitraje nacional e internacional. Si bien el sistema dualista tuvo su razón de ser en la ley arbitral de 1996, cuando la práctica arbitral en el Perú era casi inexistente, lo cierto es que en la actualidad ya no se justifica y lo más adecuado es proceder a la adopción de una legislación arbitral monista; es decir, una legislación que establezca las mismas reglas de juego tanto para arbitrajes locales como internacionales, reservando sin embargo, para estos últimos, algunas disposiciones particulares que se requieren por su propia naturaleza.

La experiencia nacional acumulada en los últimos años ha sido una guía constante en esta nueva regulación pero también el interés de aprovechar la experiencia comparada a nivel de tratados, leyes, reglamentos arbitrales, jurisprudencia y en general práctica arbitral internacional. Así en la revisión de fuentes se ha tomado en cuenta, entre otras, las legislaciones arbitrales de España, Suecia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda, Francia y Estados Unidos y los reglamentos arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y, de manera especial, se ha considerado la versión 2006 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho

Mercantil Internacional (UNCITRAL) así como los recientes documentos de trabajo sobre la revisión de su Reglamento de Arbitraje. Asimismo se ha tenido en cuenta la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Convención de Nueva York), la Convención Europea de Arbitraje Comercial Internacional de 1961 (Convención de Ginebra), la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de 1975 (Convención de Panamá) y la Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados de 1965 (Convención de Washington).

De otro lado, se ha pensado también en vías que puedan extender el arbitraje a todos los niveles sociales, bajo esta perspectiva se declara de interés nacional el desarrollo del arbitraje al alcance de las grandes mayorías y se contempla la figura del "arbitraje popular", encargándose al Ministerio de Justicia el desarrollo de acciones y programas orientados a cumplir con desarrollar programas de arbitraje, para convertir el arbitraje en una alternativa para las pequeñas empresas, los consumidores y la ciudadanía en general. Para ello hay que desarrollar esquemas que masifiquen arbitrajes de bajo costo, y que sean una alternativa, en tiempo y dinero, más económica que el sistema judicial.

Mediante Resolución Ministerial N° 027-2006-JUS de fecha 25 de enero de 2006 el Ministerio de Justicia conformó una Comisión para la revisión de la ley-arbitral de 1996, esta Comisión trabajó un "Proyecto Modificadorio" para ajustar aspectos centrales de la estructura arbitral que permitiera cerrar vacíos y corregir errores que favorezcan un desarrollo eficiente del arbitraje y comprometer a los operadores del sistema a un mayor estudio y una aplicación responsable de la ley.

Para esos efectos, los elementos o principios que inspiraron esta reforma parcial de la ley arbitral de 1996, y que se mantienen en la nueva ley, fueron los siguientes:

- a. Reforzar el carácter autónomo del arbitraje, tanto de la jurisdicción ordinaria, como de las reglas procesales comunes, protegiéndolo de intervenciones judiciales innecesarias y reconociéndolo como una institución que tiene sus propios principios y reglas. Para ello se propuso fortalecer la defensa de la competencia de los árbitros, priorizar un control ex post del laudo por medio del recurso de anulación y evitar el uso de recursos o intervenciones ex ante del laudo con la finalidad de evadir la obligación de someterse a arbitraje y a la competencia de los árbitros.
- b. Restringir la intervención judicial en determinados supuestos para facilitar el desarrollo del arbitraje como en el tema de la designación de árbitros y la resolución de recusaciones mediante una regulación que evite distorsiones o manipulaciones. En este sentido, se propuso la participación de las Cámaras de Comercio para las designaciones residuales de los árbitros y la resolución de recusaciones, en sustitución de los procesos judiciales que resultaban perjudicialmente extensos.
- c. Mejorar la regulación de las correcciones, aclaraciones e integraciones del laudo e incluir un nuevo supuesto denominado "exclusión", para retirar del laudo aquellos extremos no sometidos a decisión de los árbitros.
- d. Mejorar la regulación del recurso de anulación, teniendo en cuenta que si bien, en términos generales, ha sido bien comprendido en sus alcances por las Cortes, se ha detectado en los últimos años su uso inadecuado en algunos casos con el fin de mediatizar la eficacia del arbitraje.
- e. Mejorar la regulación de las medidas cautelares para reforzar no sólo las facultades de los árbitros en este aspecto, sino para evitar conflictos entre las medidas dictadas en sede arbitral con las dictadas en sede judicial.
- f. Mejorar la regulación de la ejecución del laudo para favorecer su cumplimiento, debiendo sólo suspenderse ante la pendencia del recurso de anulación en la Corte Superior y siempre que se constituya una garantía adecuada.

Sin embargo, para los miembros de dicha Comisión Técnica, más allá de las reformas parciales propuestas, era claro que la ley arbitral de 1996 requería en el fondo una reforma aún mayor. Por ello, la Comisión conformó un Grupo de Trabajo para que trabaje en la preparación de una reforma integral de la ley.

Entregado el "Proyecto Modificador" dentro del plazo conferido por el Ministerio de Justicia, mediante Resolución Ministerial N° 251-2006-JUS de fecha 23 de junio de 2006 se dispuso su prepublicación en el portal web del Ministerio y la mayoría de los miembros de la Comisión, por propia iniciativa, siguió trabajando durante 2 años el texto de la nueva norma con la finalidad de ampliar las reformas parciales y adecuar nuestro marco legal con las tendencias internacionales más modernas en la materia.

El resultado de este trabajo es el Decreto Legislativo que aprueba una nueva Ley General de Arbitraje, conformada por 78 artículos, 14 Disposiciones Complementarias, 4 Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones Modificatorias, 2 Disposiciones Derogatorias y 2 Disposiciones Finales, con la cual se espera consolidar el desarrollo de la práctica del arbitraje nacional y, al mismo tiempo, convertir al Perú en una plaza atractiva en la región para el desarrollo del arbitraje internacional.

PRINCIPALES REFORMAS

A continuación se comentan las normas mas importantes del Decreto Legislativo.

Título I. Disposiciones Generales

Artículo 3°

El artículo 3° responde a la preocupación que actualmente existe en el medio acerca de la indebida intervención judicial o administrativa en el arbitraje. Así contempla la protección del arbitraje frente a toda clase de interferencias que de manera directa o indirecta pretenda impedir el inicio de las actuaciones arbitrales o suspender su trámite. De esta manera, cualquier cuestionamiento a las decisiones o actuaciones de los árbitros sólo procede una vez emitido el laudo mediante el recurso de anulación, cuando los árbitros han concluido sus funciones. El control jurisdiccional se mantiene, pero se orienta a un control ex post del laudo y no a un control ex ante del aludo que frene u obstruya el desarrollo del arbitraje. Con ello se libera al arbitraje de trabas durante su tramitación, pero respetando la facultad del sistema judicial de velar por el cumplimiento de la ley y el derecho de defensa de las partes.

Artículo 10°

La ley arbitral de 1996 no se pronunciaba expresamente sobre las facultades de representación necesarias para someterse a arbitraje o participar en el proceso arbitral, lo que generó conflictos de interpretación sobre el tipo de poderes necesarios, que puede limitar en el futuro el desarrollo del arbitraje. Para estos efectos, el artículo 10 establece que debe presumirse que los gerentes o administradores de personas jurídicas cuentan con dichas facultades. Así se uniformiza en una sola norma el tema de las facultades de los representantes de las personas jurídicas para celebrar convenios arbitrales y para representarlas en procesos arbitrales, sin necesidad de acudir a otras normas distintas.

Artículo 11°

El artículo 11° pretende garantizar la buena fe con la que deben participar las partes en un arbitraje, evitando que se amparen conductas que entran en contradicción con los actos propios de quien pretende objetar las actuaciones arbitrales.

Título II. Convenio Arbitral

Artículos 13° y 14°

Los artículos 13° y 14° son normas de la mayor importancia y que tienen como antecedente directo la reforma del artículo 7° de la Ley Modelo UNCITRAL de 2006. Estas nuevas disposiciones permitirán una aplicación más eficiente del acuerdo arbitral, garantizando así el respeto a la voluntad de las partes de someterse al arbitraje. Si bien se ponen algunos límites y requisitos para la validez y vigencia del convenio arbitral, se adopta un esquema más flexible y acorde con el mundo de los negocios, en los que una interpretación excesivamente literal del requisito de que el convenio conste por escrito es contraria a las prácticas y usos del comercio.

Artículo 16°

El artículo 16° propone regular de manera comprensiva los requisitos, condiciones y alcances de la excepción de convenio arbitral, en atención a su naturaleza particular que difiere sustancialmente de las excepciones comunes, sin perjuicio del plazo de cada vía procesal para formularla y para absolverla dentro del proceso judicial respectivo. Se distinguen los supuestos según se trate de arbitraje iniciado o no, para lo cual debe tomarse en cuenta la definición introducida en el artículo 33 sobre el inicio del arbitraje.

Título III. Árbitros

En el régimen de árbitros hay dos cambios sustantivos referidos al tratamiento del mecanismo de designación de árbitros y el procedimiento de recusación. Los cambios se orientan a reforzar el principio de autonomía privada y a reducir la intervención judicial para no sobrecargar la actividad de los jueces y conseguir una mayor celeridad en los arbitrajes.

La norma encuentra antecedente en la experiencia comparada y presupone una gran responsabilidad de las Cámaras de Comercio para que actúen con independencia e imparcialidad. Sobre el particular, debe precisarse dos cosas: primero, que su actuación es supletoria o residual a la voluntad de las partes, de manera que siempre éstas podrán establecer un mecanismo distinto y segundo, que no es la primera vez que una ley asigna una función de este tipo a las Cámaras, pues como se sabe existe el ejemplo del registro de protestos de títulos valores.

Artículos 23°, 24° y 25°

Los artículos 23°, 24° y 25° contienen las siguientes novedades:

- a. Contemplan de manera más ordenada y sistemática los diferentes supuestos de nombramiento de árbitros, incluyendo el caso de pluralidad de partes como demandantes o como demandados.
- b. Establecen que en caso de problemas de designación de árbitros corresponderá a las Cámaras de Comercio actuar como entidad nominadora residual con criterios claros de prelación, no siendo necesaria ya la intervención judicial para estos fines.
- c. En esa línea, establecen los requisitos, el procedimiento y los plazos para que la Cámara de Comercio correspondiente efectúe la designación, a falta de reglas establecidas por la propia Cámara.

Artículo 29°

El artículo 29°, por su parte, soluciona muchos inconvenientes suscitados en la práctica arbitral respecto a la recusación de árbitros, en arbitrajes ad hoc. Los cambios principales que se introducen son:

- a. Se admite expresamente la posibilidad de renuncia del árbitro o la posibilidad de que la otra parte convenga con la recusación.
- b. Se contempla que a falta de entidad o persona en capacidad de resolver la recusación, corresponde residualmente dicha función a la Cámara de Comercio correspondiente.
- c. Se admite la posibilidad de que los árbitros, discrecionalmente, suspendan la tramitación del arbitraje en tanto se resuelve la recusación.
- d. Se prohíbe las recusaciones basadas en decisiones de los propios árbitros, a fin de proteger la independencia y autonomía de los mismos en el ejercicio de sus funciones.
- e. Se precisa, en la línea de que todo cuestionamiento debe efectuarse ex post del laudo, que sólo es posible cuestionar lo resuelto en la recusación por la vía del recurso de anulación.

Artículo 30°

El artículo 30° regula la figura de lo que en doctrina se conoce como tribunales arbitrales truncados, estableciendo con precisión el marco dentro del cual podrán proseguirse los arbitrajes en estas circunstancias, o procederse con premura a la designación de árbitros sustitutos. Así se evita conductas estratégicas de aquellas partes que, de manera indebida, motiven a los árbitros que han designado a la inactividad o el retiro del tribunal arbitral para evitar que este último pueda continuar con las actuaciones y resolver el caso con celeridad.

Título IV. Actuaciones arbitrales

En este título se ha mantenido el principio de la libertad en la regulación de las actuaciones arbitrales, pero precisando con mayor cuidado y orden, las facultades con las que cuentan las partes y los árbitros, así como los límites dentro de los cuales se puede gozar de dicha libertad.

Artículo 33°

El artículo 33° establece el momento del inicio del arbitraje, despejando toda incertidumbre al respecto, sin perjuicio de cualquier acuerdo distinto de las partes. Con ello se logra más certeza y predictibilidad tanto para las partes como para los propios árbitros.

Artículo 34°

El artículo 34° garantiza el debido proceso al establecer que en todo proceso arbitral el tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. De esta manera se dan lineamientos claros sobre los límites de la autonomía privada o la decisión de los árbitros en el diseño del proceso a seguirse y en la conducción del proceso mismo. Se reconoce asimismo la discrecionalidad de los árbitros para integrar los vacíos de las reglas pactadas o de la propia ley arbitral, sobre la base de los principios arbitrales y los usos y costumbres en materia arbitral. De esta manera se cierra cualquier ventana a la aplicación supletoria de la normas procesal civil que puede propiciar una "judicialización del arbitraje", lo que al ir en contra de los estándares internacionales, desincentiva a extranjeros a aceptar arbitrar en el Perú e incrementa el costo de los arbitrajes domésticos.

Artículo 41°

El artículo 41° tiene una redacción más completa acorde con la legislación comparada más reciente y calificada sobre el principio kompetenz-kompetenz, es decir sobre la facultad de los árbitros para decidir sobre su propia competencia, evitando así que las partes puedan frenar el arbitraje con acciones o recursos en la vía judicial y sin perjuicio de las facultades de las Cortes para hacer un control ex post de la competencia de los árbitros por la vía del recurso de anulación del laudo.

Se incorporan los siguientes cambios:

- a. Se admite que la competencia puede ser cuestionada por la vía de una excepción u objeción, que puede versar sobre la competencia del tribunal y en general sobre cualquier otro cuestionamiento que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. Se deja asimismo claramente establecido la exclusividad de la competencia de los árbitros para estos efectos.
- b. Las excepciones u objeciones se formulan conjuntamente con la contestación de la demanda o la reconvencción mientras que en el caso de cuestiones que se susciten durante la tramitación del arbitraje, la excepción u objeción debe formularse en la primera oportunidad que se tenga. Este cambio simplifica el trámite y permite una apreciación y evaluación conjunta de las mismas. Sin perjuicio de ello se brinda discrecionalidad a los árbitros para admitir excepciones fuera de los supuestos previstos cuando la demora resulta justificada, a fin de ser consistente con la flexibilidad que es propia del arbitraje.
- c. Se regula con mayor precisión los supuestos de resolución de la excepción como cuestión previa o junto con las demás cuestiones sometidas a decisión del tribunal arbitral relativas al fondo de la controversia y sus consecuencias según sea amparada o desestimada.
- d. Por último, en este artículo también se regula con precisión el principio de la separabilidad o autonomía del convenio arbitral, esencial para proteger al arbitraje tal como lo ha reconocido en diversos pronunciamientos el Tribunal Constitucional y las Cortes peruanas.

Artículos 47° y 48°

Los artículos 47° y 48° regulan con precisión y de manera comprehensiva las funciones tanto de tribunales judiciales como de tribunales arbitrales en la adopción y ejecución de medidas cautelares. En esa línea se establecen principios distintos a los contemplados en la regulación procesal civil, como el que las medidas cautelares se dictan sin oír a la otra parte. La norma propone que la regla sea la notificación a la otra parte, salvo que ello pueda frustrar la eficacia de la medida.

La principal novedad, además de una mejor sistemática en la regulación de este tema, es la posibilidad de que las Cortes peruanas puedan reconocer y ejecutar decisiones sobre medidas cautelares adoptadas por tribunales arbitrales extranjeros, lo que sin duda favorecerá el comercio y la inversión en el Perú.

Artículo 51°

El artículo 51° propone regular por primera vez con claridad en el Perú las reglas de confidencialidad que deben observar los árbitros, el secretario, las instituciones arbitrales, las partes y demás participantes en un arbitraje. Es de destacar que, tratándose de laudos arbitrales en los que intervenga el Estado peruano, se dispone que éstos sean públicos, debido a que en los mismos se pueden haber resuelto materias que importan al interés general o al

uso o afectación de fondos públicos, situaciones en las que por transparencia, los ciudadanos y autoridades deben contar con acceso a la información pertinente.

Título V. Laudo

Artículo 54°

El artículo 54° autoriza a que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral pueda decidir la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesarios, recogiendo la práctica internacional que permite organizar los arbitrajes de manera que se minimicen los costos en la tramitación de los mismos.

Artículo 57°

El artículo 57° se adhiere a la moderna doctrina y legislación comparada que reconoce en las partes y, en su defecto, en los árbitros, la facultad de indicar las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia. Además, se ha decidido establecer que la regla es el arbitraje de derecho y sólo si existe pacto expreso de las partes, corresponde que el tribunal arbitral resuelva en conciencia o equidad. La norma sugiere que se considere que se trata de un arbitraje de derecho, siguiendo no sólo la tendencia internacional, sino sobre todo la experiencia observada localmente que muestra que lo que se suele pactar es un arbitraje de derecho. En este sentido, se considera que una regla supletoria tiene por finalidad reflejar lo que usualmente se pacta, justamente para que la norma facilite los acuerdos entre las partes.

Artículo 58°

El artículo 58° tiene una nueva estructura que corrige muchas cuestiones oscuras, vacíos e imprecisiones de la ley arbitral de 1996, en cuanto a plazos y procedimiento para plantear, tramitar y resolver rectificaciones, interpretaciones e integraciones del laudo, a las que se añade un nuevo supuesto denominado exclusión. Estos cambios son:

- a. Se establece plazos claros, precisando que en todos los casos debe ponerse en conocimiento a la otra parte para que se pronuncie.
- b. Se fija un plazo para pronunciarse de oficio más breve a fin de que las partes tengan clara la situación del laudo antes del vencimiento del plazo para interponer el recurso de anulación.
- c. Se aclara que en cualquiera de estos supuestos la decisión fundada forma parte del laudo y no puede ser objeto de reconsideración.
- d. Se establece que si los árbitros no resuelven y notifican su decisión dentro de los plazos establecidos, se considera que la solicitud ha sido denegada y no surten efectos las decisiones notificadas fuera de plazo, con la finalidad de dar certeza a las partes del status del laudo para que puedan proceder, de estimarlo pertinente, a presentar el recurso de anulación.
- e. Se incorpora como un nuevo supuesto, la "exclusión" sobre extremos de la decisión que no formen parte de las materias sometidas a conocimiento del tribunal arbitral a fin de permitir a las partes excluir cualquier extremo en el que los árbitros se han pronunciado excediendo su competencia.

La idea es que estas solicitudes permitan corregir cualquier deficiencia sin necesidad de recurrir al recurso de anulación, o en todo caso, haciendo que estos recursos actúen como filtro que permita a los árbitros subsanar cualquier deficiencia.

Título VI. Anulación y ejecución del laudo

Artículo 62°

El artículo 62° establece que contra el laudo sólo podrá interponerse el recurso de anulación conforme a causales taxativas; prohibiendo expresamente que por esta vía pueda discutirse el fondo de la controversia, el contenido de la decisión o calificarse los criterios, motivaciones o interpretaciones de los árbitros.

Artículo 63°

En el artículo 63° se ha redactado con mayor claridad, precisión y orden las distintas causales de anulación de acuerdo a los estándares internacionales, comprendiéndose detrás de las causales los requisitos y alcances de cada una de ellas. Se precisa además que no procede la anulación por causal que ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo.

Artículo 65°

El artículo 65° regula con precisión las consecuencias de la anulación, en especial estableciendo los casos en los que corresponde interponer una demanda judicial, regresar el caso a los árbitros o componer un nuevo tribunal arbitral. Se confiere además bastante flexibilidad para que las partes puedan regular en varias de las causales, los efectos de las mismas, sobre la base del principio de autonomía privada.

Artículo 66°

El artículo 66° incorpora un cambio sustancial respecto de los efectos del recurso de anulación del laudo. A diferencia de la ley arbitral de 1996, el recurso de anulación no suspende el cumplimiento o la ejecución del laudo. Sólo se produce la suspensión cuando se cumple con el requisito de garantía acordado por las partes o, a falta de éste, cuando se constituye fianza bancaria por una cantidad equivalente al valor de condena del laudo.

Cuando no hay valor de condena, los árbitros fijan el monto de la fianza bancaria sujeto a graduación por la Corte Superior que conoce del recurso, de la misma manera, si los árbitros no fijan el monto de la fianza bancaria, la Corte Superior podrá determinarlo a pedido de parte. De esta manera, el requisito de garantía se aplica para laudos cuyo valor esté determinado, sea determinable, o incluso cuando carezca de valor monetario que pueda ser cuantificado.

La idea central de esta innovación es favorecer el cumplimiento de los laudos y desincentivar la interposición maliciosa de los recursos de anulación

Artículo 67°

El artículo 67° supedita la ejecución arbitral siempre a la voluntad de las partes y también a la discrecionalidad de los árbitros. La norma es flexible por la variedad de supuestos que pueden suscitarse y posibilita que las partes recurran a la ejecución judicial en cualquier momento cuando resulte más efectiva.

Artículo 68°

El artículo 68° establece que la ejecución del laudo puede ser suspendida en cualquier etapa en la que se encuentre siempre que se acredite el pago de la obligación o la declaración de suspensión de la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. Se precisa además que los jueces no pueden admitir recursos cuyo objeto sea dilatar la ejecución del laudo. Se busca así evitar la conducta estratégica, que suele seguirse en la

práctica, de plantear anulaciones con el único propósito de evitar el cumplimiento del laudo

Título VII. Costos Arbitrales

Artículo 70°

El artículo 70° identifica con precisión los conceptos que comprenden los costos del arbitraje y dispone que serán fijados en el laudo por los árbitros.

Artículo 72°

Esta norma regula con precisión todo lo referente al requerimiento y pago de los anticipos de los costos del arbitraje y las correspondientes consecuencias en caso de incumplimiento.

Artículo 73°

El artículo 73° establece las condiciones dentro de las cuales los árbitros deben asignar o distribuir los costos del arbitraje entre las partes.

Título VIII. Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros

Artículo 75°

El artículo 75° establece su aplicación, en todo o en parte, exista o no tratado aplicable, cuando las disposiciones de la ley arbitral sean más favorables a la parte que pida el reconocimiento y ejecución del laudo extranjero.

Artículo 78°

El artículo 78° hace suya la recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2) del artículo II y del párrafo 1) del artículo VII de la Convención de Nueva York, de 10 de junio de 1958, adoptada por UNCITRAL el 7 de julio de 2006 en su 39° período de sesiones, a efectos de posibilitar la aplicación de las disposiciones de la ley arbitral que sean más favorables a dicho instrumento internacional.

Disposiciones Complementarias

El Decreto Legislativo contiene catorce (14) Disposiciones Complementarias, entre las que destacan la segunda, cuarta, sexta, séptima y décima.

La Segunda Disposición permite que las instituciones arbitrales puedan celebrar convenios de la cooperación con instituciones públicas y privadas, a efectos de facilitar la ejecución de medidas cautelares o de laudos. Así, por ejemplo, una institución arbitral podría suscribir acuerdos con los Registros Públicos a fin de certificar las firmas de los árbitros con la finalidad de inscribir decisiones arbitrales y así dar mayor eficacia a las decisiones.

La Cuarta Disposición establece que en toda norma legal en la que se haga referencia a los jueces a efectos de resolver una controversia o tomar una decisión, se entenderá también referido a un tribunal arbitral, siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y, obviamente, exista de por medio un convenio arbitral entre las partes. Esto para evitar interpretaciones equivocadas de una serie de normas que hacen referencia a decisiones judiciales o recurrir al juez y que se pretende entender como limitadas a la autoridad judicial ordinaria.

La Sexta y Séptima disposiciones recogen dos supuestos especiales de arbitraje, los arbitrajes derivados de estatutos o pactos sociales y los arbitrajes derivados de testamentos o del acuerdo entre los sucesores.

La Décima disposición establece que las disposiciones procesales contenidas en la ley arbitral respecto de cualquier actuación judicial, prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil, en particular en cuanto a los supuestos de excepción de convenio arbitral, ejecución del laudo, reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, entre otros.

Disposiciones Transitorias

El Decreto Legislativo contiene 4 Disposiciones Transitorias, mediante las cuales se establece la aplicación en el tiempo de las normas de la ley arbitral de 1996 y de la nueva legislación arbitral, así como se otorga a las instituciones arbitrales un plazo de adecuación de sus reglamentos al nuevo marco legal.

Disposiciones Modificatorias

Se aprueban 4 Disposiciones Modificatorias, mediante las cuales se modifican algunos artículos del Código Civil, del Código Procesal Civil, de la Ley General de Sociedades y de la Ley de Garantías Mobiliarias, todas encaminadas a concordar dichos dispositivos con la nueva legislación arbitral.

Disposiciones Derogatorias y Finales

El Decreto Legislativo contiene 2 Disposiciones Derogatorias y una Disposición Final, destacando aquellas que derogan la ley arbitral de 1996 y disponen la entrada en vigencia de la nueva legislación para el 1° de setiembre de 2008, a efectos de posibilitar que todos los agentes económicos estén en aptitud de aplicarla plenamente.

CONSIDERACIONES FINALES

Es necesario señalar que la mayoría parte de los cambios de la norma se deben al tránsito de una ley dualista a una ley monista, que regirá tanto para el arbitraje internacional como para el arbitraje nacional. Con ello se estandariza el tratamiento arbitral y acercamos el arbitraje doméstico a estándares internacionales.

Resta, sin embargo, por describir las principales disposiciones que, en razón de las circunstancias, sólo serán aplicables al arbitraje internacional. Sobre el particular, es necesario indicar en primer término, que el artículo 5° de la nueva norma mantiene con ligeras precisiones, los supuestos establecidos en el artículo 92° de la ley arbitral de 1996, para saber cuando un arbitraje dentro del territorio nacional es un arbitraje internacional.

Sin embargo, en razón de las circunstancias, determinadas disposiciones sólo serán aplicables al arbitraje internacional. Los principales artículos que serán de aplicación exclusiva al arbitraje internacional son los siguientes:

- a. Artículo 5°, que determina cuando estamos ante un arbitraje internacional.
- b. Artículo 2.2°, que establece que cuando un Estado arbitre internacionalmente en el Perú, no podrá invocar las prerrogativas de su derecho interno para sustraerse del arbitraje.
- c. Artículo 13.7°, que identifica las leyes aplicables para analizar la validez de un convenio arbitral.

- d. Artículo 22°, que establece que en los arbitrajes internacionales de derecho no es necesaria la calidad de abogado para ejercer el cargo de árbitro.
- e. Artículo 57.2°, que regula la forma de determinar la ley aplicable al fondo de la controversia.

Por último, corresponde identificar las principales disposiciones que se aplicarán, aun cuando el arbitraje se desarrolle fuera del Perú:

- a. Artículos 13°, 14° y 16°, que serán de aplicación en caso una parte que ha celebrado un convenio arbitral con sede fuera del Perú interponga en sede judicial peruana una excepción de convenio arbitral.
- b. Artículo 45°, que habilita la posibilidad de que el juez peruano colabore con la actuación de un medio probatorio, dispuesto por un tribunal arbitral extranjero.
- c. Artículos 74°, 75°, 76°, 77° y 78°, que se aplicarán cuando se solicite en el Perú el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitraje extranjero.

En suma, se trata de una norma moderna, con las últimas tendencias y desarrollos internacionales, que aspira a orientar un desarrollo eficiente del arbitraje en el Perú y en toda la región.

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

La vigencia del presente Decreto Legislativo no irrogará costo alguno al Estado, por el contrario reducirá los costos de transacción de las inversiones y del comercio en general.

EFFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Se modifican las siguientes normas: El artículo 2058° del Código Civil aprobado por Decreto Legislativo N° 295, el artículo 384° del Código Procesal Civil del Texto Único Ordenado aprobado mediante Resolución Ministerial N° 351-2004-JUS, los artículos 14°, 48° y 188° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y el artículo 48° de la Ley N° 28677, Ley de Garantías Mobiliarias.

Se deroga el segundo párrafo del artículo 1399° y el artículo 2064° del Código Civil aprobado por Decreto Legislativo N° 295 y la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.